



Adolescentes en conflicto con la ley, sin segunda oportunidad

⟨ JUNIO 2025 ⟩

NOTA #1

En Colombia, los adolescentes que tienen problemas con la ley deben ser atendidos por un sistema que reconozca su estatus como titulares de derechos, enfocándose en su desarrollo y bienestar en lugar del castigo. Este sistema, denominado Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), se centra en ofrecer una respuesta diferenciada, pedagógica y restaurativa ante las conductas que infringen la ley.

El SRPA se fundamenta en la creencia de que las adolescencias, al encontrarse en una etapa crucial de su desarrollo, merecen una segunda oportunidad. Más que aplicar sanciones, este sistema pretende crear procesos que les ayuden a entender el daño infligido, reparar a las víctimas y reconstruir sus proyectos de vida. Se espera que cada intervención sea una oportunidad para transformar caminos marcados por la exclusión, la violencia y la falta de oportunidades.

Esta nota técnica es una de las ocho elaboradas por **NiñezYA**¹, con el propósito de ofrecer insumos rigurosos a los equipos técnicos de candidaturas a la Presidencia de la República y al Congreso (2026–2030). En ella se examinan los principales obstáculos estructurales y de implementación que dificultan que el SRPA alcance su objetivo restaurativo. Entre estos obstáculos, se resalta una débil coordinación institucional, la continua prevalencia de medidas punitivas como respuesta predominante y la escasa participación de adolescentes y entidades territoriales en los procesos decisionales. Además, el documento proporciona evidencias y sugerencias para que este sistema deje de ser, en la práctica, una mera ilusión y se transforme en un mecanismo eficaz de inclusión, justicia y protección de derechos.

■ Datos que demandan actuar YA

- En 2024 se registraron **6.265 ingresos al SRPA en Colombia** (ICBF, 2024).
- De acuerdo con datos del ICBF, en una caracterización realizada al SRPA, **73% de los adolescentes** que hacía parte del sistema **sufrió agresiones antes de su ingreso**. El 38% fueron agresiones físicas; 29% verbales y 33% ambas (ICBF, 2019)².
- **12 de cada 100 adolescentes que estaban dentro del SRPA vivieron con algún familiar que consumía drogas ilícitas**, había pertenecido a grupos armados y había tenido alguna sanción penal (ICBF, 2019)³.
- **11,9% de los adolescentes** y jóvenes que hacían parte del SRPA **manifestó tener hijos**. De ese porcentaje 61,2% eran menores de edad; 70,8%, hombres y 27,3%, mujeres. El 1,2% estaba esperando un hijo (ICBF, 2019).
- **51,1% de los adolescentes** y jóvenes que hacían parte del SRPA **tenían o habían tenido algún miembro de su familia privado de la libertad** (ICBF, 2019).
- **53% de los adolescentes** y jóvenes que ingresó al SRPA **tenía como máximo grado de escolaridad básica secundaria incompleta** (Angulo 2019)⁴.
- **13 años fue la edad media de iniciación sexual** de los adolescentes del SRPA (ICBF, 2013).
- **2,4% de los adolescentes** del SRPA **presentó una conducta suicida** (Procuraduría, 2020)⁵.

1 **NiñezYA** es la iniciativa de naturaleza social de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que busca contribuir con el cumplimiento de los derechos de la niñez. Para más información sobre la coalición consulte <https://ninezya.org/>

2 ICBF (2019). Primera encuesta de caracterización de la población vinculada al Sistema Nacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Bogotá. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/478363669/M2-Primera-Encuesta-Nacional-de-CharacterizaciA-n-de-la-PoblaciA-n-del-SRPA-2019>

3 En la encuesta realizada a 1.288 adolescentes y jóvenes del SRPA, el 46,5% había ingresado a modalidades de Restablecimiento de Derechos previo a su ingreso al SRPA (ICBF, 2019) "solo el 30,8% manifestó haber sido atendido por el ICBF en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (ICBF, 2019)".

4 Angulo J. P. y otros (2019). Familias de adolescentes y jóvenes en el Sistema de Responsabilidad Penal. Diagnóstico y recomendaciones de política. ICBF, Bogotá. Recuperado de: Boletín No 12 del Observatorio de familias del DNP.

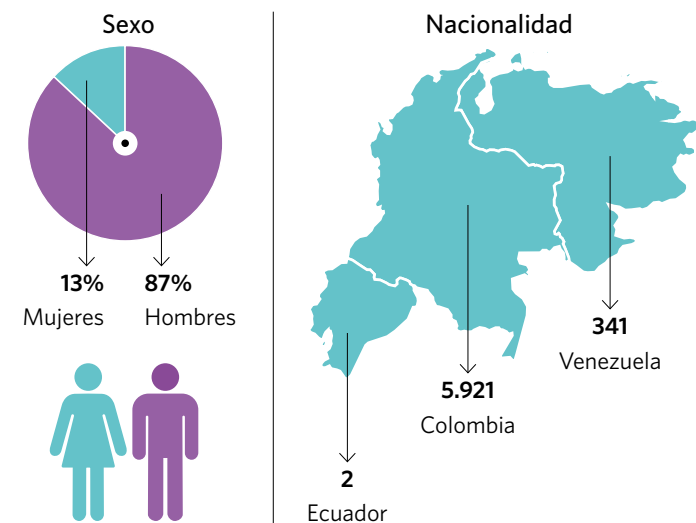
5 Procuraduría General de la Nación (2020). Informe de diagnóstico a las unidades privativas de la libertad, los Centros de Atención Especializada - CAE y los Centros de Internamiento Preventivo - CIP del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA. Recuperado de <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/Informe%20SRPA%20-%20VF.pdf>

SRPA, desafíos estructurales impiden la garantía de procesos restaurativos y pedagógicos

Según el Boletín Estadístico de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, diciembre 2024), durante 2024 se registraron 6.265 ingresos al sistema. Las regiones con mayores ingresos fueron Bogotá (1.193), Antioquia (992) y Valle del Cauca (795)⁶.

La distribución por sexo muestra que la gran mayoría de los adolescentes ingresados al SRPA son hombres (87%), mientras que las mujeres representan el 13%. En cuanto a la edad, más del 88% de los adolescentes tienen entre 14 y 17 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de esta población en una etapa clave para su desarrollo social, emocional y educativo. La nacionalidad de los adolescentes en el sistema muestra que la mayoría son de Colombia (5.921), seguidos por un pequeño porcentaje de personas provenientes de Venezuela (341) y de Ecuador (2) (ICBF, 2024).

GRÁFICO 1. Porcentaje de adolescentes y jóvenes en el SRPA, según sexo y nacionalidad



Fuente: ICBF, 2024

Según el ICBF y el Ministerio de Justicia⁷, la mayoría de los adolescentes en el SRPA había sido víctima de maltrato, violencia intrafamiliar, violencia sexual y abandono. El 58,2% tenía familia nuclear monoparental y, de este porcentaje, el 86,3% tenía jefatura femenina. Esta situación se asoció con abandono del padre, dificultades de la madre para mantener el control del hogar y con la necesidad de que los adolescentes a una edad

temprana tuvieran que buscar trabajo para ayudar con el sostenimiento de la casa.

Por otra parte, 21,6% se declaró víctima del conflicto armado, lo que es consistente con los datos del Registro Único de Víctimas (RUV), reportados para la vigencia 2018-2019. El 18,7% en efecto se encontraba en dicho sistema (ICBF, 2019).

El SRPA, la familia y la red de apoyo constituyen pilares fundamentales en los procesos de atención y acompañamiento. Sin embargo, los datos muestran una realidad preocupante que exige respuestas contundentes: 11,9% de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA manifestó tener hijos y, de ese grupo, 61,2% eran menores de edad, lo que evidencia no solo la ruptura temprana de proyectos de vida, sino también la urgencia de generar herramientas específicas para quienes ya asumen responsabilidades parentales en contextos adversos (ICBF, 2019).

Además, 51,1% reportó que un miembro de su familia ha estado privado de la libertad, lo que revela ciclos intergeneracionales de exclusión, desarraigo y repetición de trayectorias marcadas por la violencia y la marginalidad (ICBF, 2019). A esto se suma el hecho de que, en muchos casos, los vínculos familiares se ven profundamente afectados o incluso fracturados, debido a que los adolescentes y jóvenes cumplen su sanción en lugares apartados de sus territorios de origen, ya que no todos los departamentos cuentan con Centros de Atención Especializada (CAE). Esta dispersión geográfica limita el contacto regular con sus familias y reduce las posibilidades de mantener una red de apoyo estable, lo que afecta gravemente su proceso de inclusión social.

En este escenario, mantener y fortalecer los vínculos familiares no es solo deseable, sino imprescindible. El Estado debe garantizar entornos que favorezcan la reconstrucción de lazos afectivos, brindar acompañamiento psicosocial y diseñar rutas integrales que reconozcan a estos adolescentes y jóvenes no solo como sujetos de responsabilidad penal, sino también como padres y madres en formación, cuya inclusión dependerá, en gran medida, de la solidez de las redes que logren tejer a su alrededor. Una realidad que no ha sido contemplada por el SRPA.

Los delitos por los que los adolescentes son vinculados al SRPA también dan cuenta de sus contextos, incluso de la situación por la que atraviesa el país que termina afectándolos. Los delitos más frecuentes incluyen hurto (1.482 casos), tráfico de estupefacientes (758 casos), violencia intrafamiliar (562 casos), fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones (471 casos), lesiones personales (419 casos) y acceso carnal abusivo con menor de 14 años (317 casos) (ICBF, 2023)⁸.

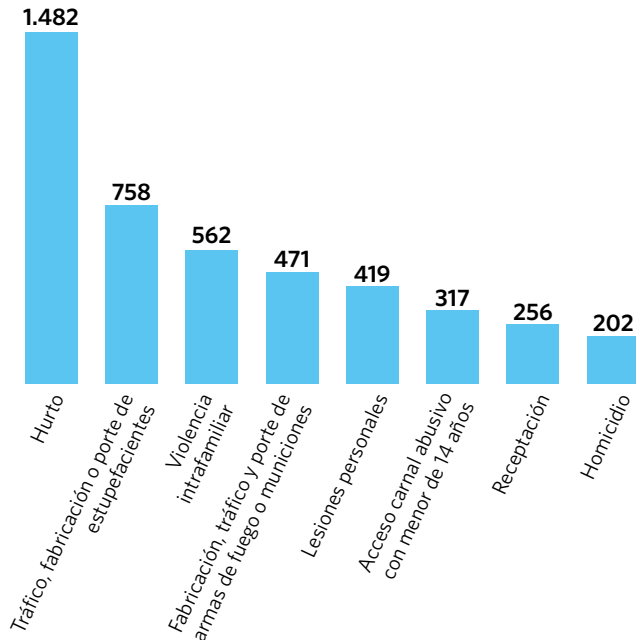
⁶ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, Diciembre 2024). Boletín Estadístico de la Dirección de Protección. Recuperado de https://www.icbf.gov.co/system/files/boletin_direccion_proteccion_noviembre_2024.pdf

⁷ Ministerio de Justicia y el Derecho (2021). Evaluación y verificación del seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Oficina de Control Interno. Bogotá. Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/ministerio/Documents/ControlInterno/Informe%20Final%20SRPA.pdf>

⁸ Boletín Estadístico de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Recuperado de https://www.icbf.gov.co/system/files/boletin_direccion_de_proteccion_septiembre_2023.pdf

GRÁFICO 2. Principales motivos de ingreso al SRPA, 2024

Número de casos



Fuente: ICBF, 2024

Estas cifras no solo reflejan los actos cometidos, sino que también son una manifestación de las condiciones socioeconómicas que pueden llevar a muchos adolescentes a la delincuencia. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, la descomposición del tejido social y la violencia intrafamiliar son factores determinantes en estos comportamientos. Aunque delitos graves como el homicidio se presentaron en menor proporción, con 202 casos, su impacto en la seguridad y en la percepción pública sigue siendo significativo. Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y de intervención temprana que reduzcan la reincidencia y eviten la judicialización de adolescentes por delitos menores, priorizando medidas restaurativas que permitan su integración social (ICBF, 2024).

A este panorama se suma un factor crítico, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados. De acuerdo con los datos más recientes de la Defensoría del Pueblo⁹, se reportaron 533 casos en el año 2024, siendo el departamento del Cauca el más afectado con 359 casos, seguido por Norte de Santander, Catatumbo, Antioquia y Putumayo. Los registros muestran que el 60% de las víctimas son niños y adolescentes, y el 40% niñas y adolescentes;

además, el 50% pertenece a comunidades indígenas y el 6% a comunidades afrocolombianas, lo cual evidencia un impacto desproporcionado en poblaciones históricamente vulneradas. En cuanto a los presuntos responsables, las disidencias sin especificar y el Estado Mayor Central concentran la mayoría de los casos, seguidos por grupos no identificados.

Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos¹⁰, indica que 216 casos de reclutamiento, uso o utilización de menores fueron verificados en 2024, de los cuales 125 correspondían a víctimas indígenas y afrodescendientes, y en 65 de estos casos, las víctimas sufrieron múltiples violaciones de derechos. Esta situación no solo profundiza los ciclos de violencia, sino que se convierte en un factor estructural de exclusión que condiciona la entrada de adolescentes en el sistema penal juvenil, muchas veces en condiciones de victimización previa.

Finalmente, en relación con la reincidencia, el documento *De vueltas en vueltas: reincidencia y delincuencia juvenil en Colombia* (2020) identifica siete factores personales clave para predecir la reincidencia, entre los cuales destaca el consumo de drogas como el más relevante según la evidencia. Le siguen factores como ser hombre, padecer enfermedades mentales y la presencia de otros déficits psicológicos, que se reflejan en características de personalidad, actitudes, valores y creencias que influyen significativamente en la motivación hacia la conducta delictiva¹¹.

En cuanto a los riesgos de oportunidad, este mismo estudio indica que 90% de los adolescentes analizados hace un uso inadecuado del tiempo, y que 10% vive en situación de calle. Dentro de este último grupo, 100% de los jóvenes sin un domicilio fijo reincidieron en comportamientos delictivos, y lo hicieron en menor tiempo y con una progresión más acelerada en su trayectoria delictiva.

Restablecimiento de derechos: una tarea pendiente

Uno de los principales retos del SRPA es el restablecimiento de los derechos de los jóvenes que ingresan al sistema, siendo el acceso a la educación una de las prioridades. Según la caracterización realizada por el ICBF en 2019, el 77% de los adolescentes vinculados manifestó el deseo de regresar al sistema educativo. De ellos, 82% no había terminado la educación media, 61% no había concluido la básica y solo 2,6% cursaba estudios en programas técnicos, tecnológicos o universitarios. Además, 76% presentaba rezago escolar y extraedad superior a dos años, respecto a la edad esperada para su nivel educativo.

9 Defensoría del Pueblo, Colombia. Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Recuperado <https://www.defensoria.gov.co/-/reporte-sobre-casos-de-reclutamiento-conocidos-por-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-durante-2024>. Datos ajustados con información entregada por la entidad en el Foro Gran Alianza por la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Juventud en Colombia de la Contraloría General de la República, 8 de abril de 2025.

10 Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2024. Periodo: enero a diciembre de 2024. Recuperado de https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/informe-anual-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-en-colombia-2024/

11 Álvarez-Correa, M. (2020). De "Vuelta en Vueltas" Reincidencia y Delincuencia Juvenil en Colombia (ley 198 de 2006). Investigación publicada por la Procuraduría General de la Nación, a través del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP). Recuperado de <https://iemp.gov.co/publicaciones/infancia-y-adolescencia/de-vuelta-en-vueltas-reincidencia-y-delincuencia-juvenil-en-colombia-ley-198-de-2006/>

Desde la perspectiva del derecho a la salud, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) señala que la mayoría de los adolescentes vinculados al SRPA enfrentan problemas de salud complejos, adoptan comportamientos de riesgo y presentan altas tasas de mortalidad prematura. Entre las principales causas de consulta y tratamiento se destacan el consumo de sustancias psicoactivas (Gráfico 3) y los problemas de salud mental (MSPS, 2020)¹².

En relación con la salud mental, un informe de la Defensoría del Pueblo (2015)¹³ identificó que 1,92% de la población vinculada al SRPA presentaba algún trastorno mental, siendo la farmacodependencia el más frecuente, seguido por la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos, como la depresión y el trastorno afectivo bipolar. No obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social advierte que esta cifra podría estar subestimada, ya que la evidencia muestra que las personas privadas de la libertad presentan una mayor prevalencia de trastornos mentales en comparación con la población general. De hecho, según la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, el 4% de las personas mayores de 18 años reportó haber presentado al menos un trastorno mental en el último año.

Según la encuesta realizada por el ICBF en 2019, el 20,5% de los adolescentes vinculados al SRPA manifestó haber intentado hacerse daño. Esta conducta fue reportada por 22% de quienes se encontraban en privación de libertad, 24,3% de aquellos con medidas complementarias y 14,6% de quienes cumplían medidas no privativas. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en una visita a unidades con medidas privativas, registró que 421 adolescentes en 34 centros afirmaron estar recibiendo atención

psiquiátrica especializada (Procuraduría, 2020).

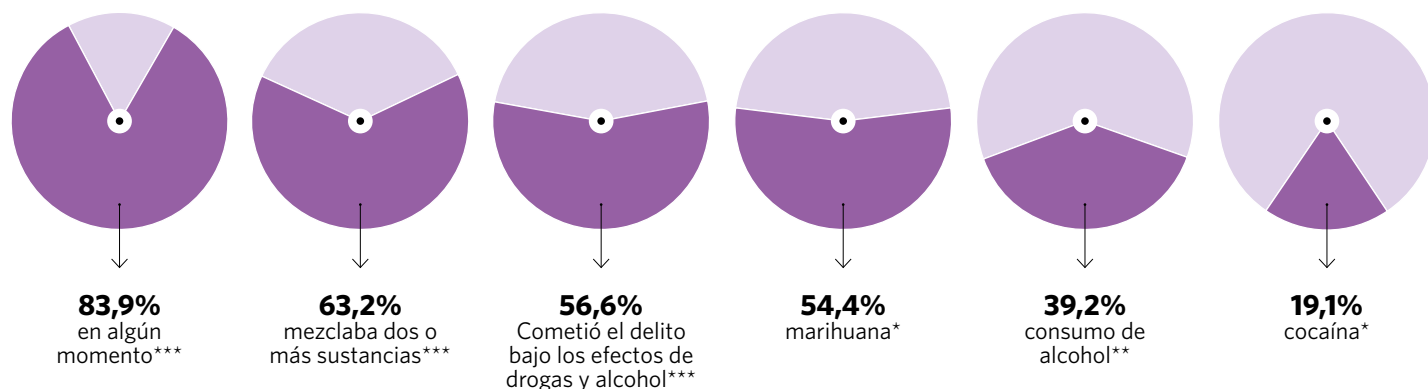
Estos hallazgos evidencian que la salud, y particularmente la salud mental, de los adolescentes vinculados al SRPA debe ser una prioridad. Esto es aún más relevante si se considera que, durante una visita realizada en 2020 a 58 unidades de atención en 23 departamentos, la Procuraduría identificó que el acceso a los servicios de salud en estos centros se garantiza mediante convenios con Entidades Prestadoras de Salud, las cuales fueron señaladas por ofrecer servicios de baja calidad.



“Soñamos con que herramientas de salud mental sean incluidas gratuitamente para todas las familias” - Manifiesto de las niñas, niños y adolescentes de Medellín Antioquia.¹⁴

Adicionalmente, las condiciones en las que se encuentran estos adolescentes distan de ser adecuadas. Según la Defensoría del Pueblo en su “Informe defensorial sobre la situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes” (2023)¹⁵, las condiciones físicas, estructurales y de salubridad de los centros vulneran la dignidad humana, así como la seguridad y la integridad de los adolescentes. En las visitas realizadas se identificaron fallas en los sistemas eléctricos, problemas de ventilación e iluminación, y ausencia de dispositivos básicos de seguridad como cámaras, garitas de vigilancia, perros adiestrados o escáneres corporales (body scanners).

GRÁFICO 3. Consumo sustancias psicoactivas en el último año (2019)



Fuentes: *Minjusticia, 2021 **MSPS, 2020 ***ICBF, 2019

12 MSPS, (2020). Documento con orientaciones para la atención integral en salud a los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Bogotá. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/orientaciones-adolescentes-srpa-vf.pdf>

13 Defensoría del Pueblo de Colombia (2015). Informe atención en salud mental a población privada de la libertad 2015. Bogotá. Recuperado de <https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-alerta-por-mala-atenci%C3%B3n-en-salud-mental-en-c%C3%A1rceles>

14 Niñez YA Antioquia. Manifiesto de las niñas, niños y adolescentes de Medellín Antioquia. Reflexiones para un buen Gobernante.

15 Defensoría del Pueblo (2023). Informe defensorial: Situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Bogotá. Recuperado de <https://repositorio.defensoria.gov.co/items/47566349-cca8-4d75-bb06-5938a4c36c4e>

El diagnóstico muestra que 58,8% de los centros presentaba humedad en habitaciones, baños y espacios comunes; 41,2% tenía daños en las instalaciones eléctricas; 17,6% carecía de iluminación y ventilación adecuadas y 41,2% no contaba con muros que garantizaran la seguridad del personal. De los 17 centros visitados, solo cinco cumplían con condiciones mínimas, es decir, sin humedad ni daños eléctricos y con cocinas y baños separados.

Estos hallazgos evidencian que la mayoría de los centros donde los adolescentes cumplen medidas privativas de libertad no cuentan con las condiciones adecuadas para proteger y garantizar sus derechos. Desde una perspectiva material, la infraestructura de estos espacios debería estar completamente adaptada para ofrecer entornos dignos, seguros y con enfoque pedagógico. Sin embargo, la presencia de humedades, fallas eléctricas y deficiencias en ventilación o iluminación no solo afecta el bienestar físico y emocional de los adolescentes, sino que también limita el cumplimiento del objetivo formativo y restaurativo de estas medidas. En consecuencia, estas condiciones constituyen una vulneración de derechos fundamentales, al poner en riesgo la dignidad, la seguridad y la integridad de los adolescentes privados de la libertad.

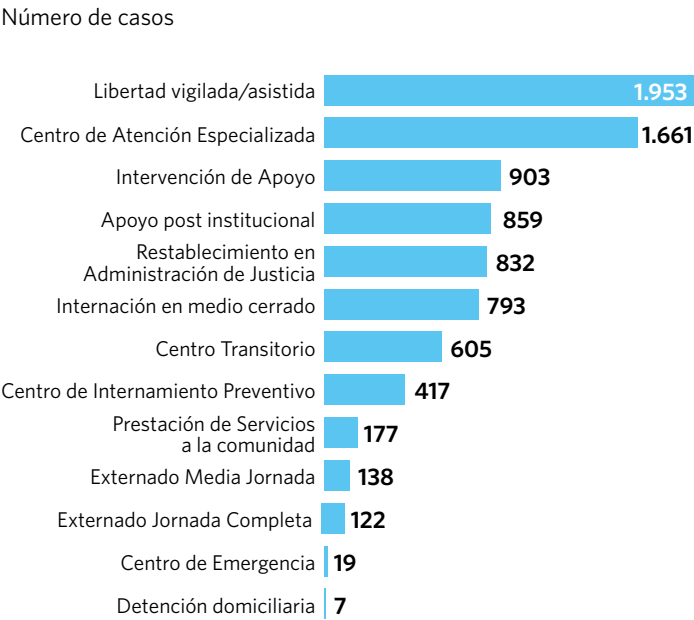
En Colombia predominan las medidas punitivas

A pesar de que el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) promueve un enfoque pedagógico y restaurativo en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley, en la práctica el sistema sigue adoptando medidas punitivas de manera predominante.

En 2024, 1.661 adolescentes fueron privados de la libertad en CAE, mientras que solo 1.953 accedieron a la libertad asistida/vigilada (ICBF, 2024) (Gráfico 4). Este panorama sugiere que la privación de la libertad sigue siendo una respuesta recurrente, a pesar de que debería ser una medida excepcional, pues se ha demostrado que la privación de la libertad de adolescentes no reduce la reincidencia ni favorece su reintegración social; por el contrario, refuerza la marginación y exclusión, perpetuando el ciclo de criminalización juvenil.

La reincidencia continúa siendo una preocupación central, especialmente entre los adolescentes que carecen de redes de apoyo sólidas o de acceso a programas de educación, empleo y acompañamiento psicosocial durante su proceso de inclusión social. En respuesta a este desafío, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026¹⁶ propuso una reforma al SRPA con un enfoque restaurativo y pedagógico. Esta apuesta incluye la implementación de la Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa en los territorios, el fortalecimiento de los programas de justicia restaurativa y el restablecimiento de los

GRÁFICO 4. Medidas en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA



Fuente: ICBF, 2024. Fecha de corte: diciembre 2024.

vínculos comunitarios como estrategias clave para prevenir la reincidencia. No obstante, es fundamental que estas iniciativas se materialicen de manera efectiva.

Según Méndez y Sánchez (2022)¹⁷ en el documento soporte Oportunidades sí hay, los jóvenes que egresan del SRPA enfrentan la falta de estructuras de vida estables y relaciones significativas en la comunidad, lo que incrementa el riesgo de reincidencia. La estigmatización, las expectativas familiares y entornos sociales poco protectores limitan su acceso a oportunidades de reinserción. Aunque se formuló el CONPES 4040 de 2021 para abordar estas cuestiones, solo ha avanzado un 40%. Es crucial fortalecer el tejido social y familiar, reconociendo a la comunidad como un actor clave en la justicia restaurativa y apoyando trayectorias de vida positivas (NiñezYA, 2021, Nota de Política Pública).

Los actores del sistema no están articulados

Uno de los principales problemas que enfrenta el SRPA es la falta de articulación entre los actores clave del sistema judicial, como defensores públicos, jueces y fiscales. Muchos operadores de justicia aplican un enfoque punitivo heredado del sistema de justicia para adultos, lo que resulta en la imposición desproporcionada de sanciones privativas de la libertad para delitos que, en muchos casos, podrían abordarse con medidas

16 Departamento Nacional de Planeación. (2023). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia potencia mundial de la vida. Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-03-17-bases-plan-nacional-desarrollo-web.pdf>.
17 Méndez, M. M., & Sánchez, J. F. (2022). Las representaciones sociales de los educadores sobre los adolescentes vinculados al SRPA. Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana.

restaurativas. Barrios, M. & Salinas, J. (2024)¹⁸ han identificado, además, una falta de especialización en temas de infancia y adolescencia dentro del sistema judicial, lo que agrava la imposición de sanciones sin considerar el contexto social y la necesidad de un tratamiento diferenciado para los adolescentes.

A eso se agrega que el mecanismo de articulación del SRPA se estructura a través del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), creado mediante el Decreto 1885 de 2015 como instancia encargada de coordinar, articular e integrar las acciones de las entidades del orden nacional y territorial, tanto de la rama ejecutiva como judicial. Su propósito es garantizar que el SRPA opere de manera especializada, restaurativa y pedagógica, respetando los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo, su implementación se ve obstaculizada por una débil articulación intersectorial, una baja participación efectiva de los entes territoriales y una escasa inclusión sustantiva de adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones.

Los comités departamentales y distritales del SNCRPA, encargados de traducir las políticas en acciones territoriales, enfrentan retos para adaptar los planes de acción a las realidades locales y para garantizar un seguimiento sistemático de los derechos de los adolescentes. Aunque existen directrices técnicas sobre justicia restaurativa, prevención del delito y garantías en los planes de desarrollo, su aplicación efectiva sigue siendo fragmentada y limitada.

Como se evidencia, el principal cuello de botella del sistema no radica en su marco normativo, que es sólido, sino en su limitada capacidad para traducirse en un mecanismo real de transformación. Esto ocurre en gran medida por la falta de participación activa y cualificada de los gobiernos territoriales, así como de los propios adolescentes y jóvenes. Su involucramiento no solo constituye un derecho, sino que es una condición indispensable para que las estrategias diseñadas respondan de manera genuina a sus contextos y necesidades. Solo poniendo sus voces en el centro de la política pública, el SRPA podrá convertirse en un instrumento verdaderamente transformador, justo e inclusivo.

■ Acciones que no dan más espera

- Fortalecer la articulación del SNCRPA como cabeza del SRPA y el funcionamiento de los Comités Departamentales del SRPA.
- Cumplir con los mandatos que establecen que el sistema de justicia para adolescentes debe fundamentarse en los principios de la justicia restaurativa y que toda acción en el marco del SRPA debe ser pedagógica, restaurativa, educativa y debe conducir a reorientar el proyecto de vida de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

- Transformar y fortalecer los equipos judicial, acusador, investigativo y psicosocial, en las entidades que hacen parte del SRPA para una gestión más coordinada y efectiva del sistema.
- Mejorar y unificar los sistemas de información de los adolescentes y las familias que hacen parte del SRPA, bajo la dirección técnica del Ministerio de Justicia como ente rector del SRPA.
- Actualizar los datos de la Primera Encuesta de Caracterización de la población vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), con el fin de contar con información pertinente que permita diseñar políticas más focalizadas.
- Implementar programas de acompañamiento a las familias y los adolescentes en el post-egreso.
- Mejorar y adecuar la infraestructura de atención a la población que hace parte del SRPA, sobre todo a la que está privada de la libertad para garantizar condiciones dignas.
- Garantizar el acceso del 100% de los adolescentes del SRPA al PARD.
- Demandar el cumplimiento por parte de los defensores de familia, la defensoría pública y los jueces para que se respete y garantice el debido proceso a los adolescentes durante el ingreso, la ejecución de la sanción y el egreso del SRPA.
- Fortalecer los procesos participativos de adolescentes y jóvenes en los espacios de toma de decisión del SRPA y en los procesos de participación a nivel local.
- Garantizar el derecho a una educación de calidad y flexible de todos los adolescentes y jóvenes del SRPA.
- Garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud especializada de toda la población del SRPA, en especial los servicios de salud mental, prevención o reducción del consumo de sustancias psicoactivas, salud sexual y reproductiva.
- Fortalecer los programas deportivos y culturales dirigidos a los adolescentes del SRPA en especial los que están privados de la libertad.
- Separar a los mayores y los menores de edad, en el caso de los adolescentes privados de la libertad.
- Implementar la Política Pública Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, promoviendo programas de justicia restaurativa en los territorios y garantizando que cada adolescente acceda a mecanismos de mediación, reparación del daño y recomposición del tejido social.

18 Barrios, M., & Salinas, J. (2024). Justicia restaurativa y pedagógica: La aplicación de la medida privativa de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) (Sección 13.1, "Sistema que no funciona como sistema"). Universidad del Rosario.

- Fortalecer el acceso a medidas no privativas de la libertad, asegurando que las sanciones pedagógicas y comunitarias permitan la continuidad en la educación, el acceso a empleo y el acompañamiento psicosocial, priorizando la reintegración social sobre la privación de la libertad.
- Establecer criterios claros para la sustitución de la medida privativa de la libertad, basados en el progreso individual del adolescente y la finalidad restaurativa, pedagógica y educativa del SRPA y no en el cumplimiento de un porcentaje arbitrario de la sanción, promoviendo la aplicación de estándares nacionales e internacionales.
- Generar reportes periódicos sobre la aplicación de medidas sustitutivas, promoviendo la transparencia en la toma de decisiones judiciales y permitiendo la evaluación continua del impacto de las sanciones en la inclusión social de los adolescentes en conflicto con la ley.
- Fortalecer la capacitación y formación de fiscales, jueces y defensores públicos en principios pedagógicos y restaurativos para adolescentes, asegurando que se prioricen medidas alternativas a la privación de la libertad.
- Ampliar el acceso a programas educativos y de formación laboral, garantizando oportunidades reales de inclusión social para los/las adolescentes en conflicto con la ley.
- Garantizar durante el proceso de atención el derecho de los adolescentes y jóvenes a mantener vínculos afectivos con sus familias o redes de apoyo. En particular, el ICBF debe establecer lineamientos claros para proteger y facilitar el contacto entre los adolescentes y jóvenes privados de la libertad y sus hijos e hijas, en condiciones que salvaguarden su bienestar emocional y el principio de interés superior del niño.
- Fortalecer estrategias integrales de prevención que identifiquen y atiendan de manera oportuna los factores de riesgo que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes en sus territorios, como la desescolarización, la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y la exclusión social, garantizando oportunidades reales de desarrollo y protección que eviten su ingreso al SRPA.



“Queremos que se garantice a los adolescentes espacios seguros, lejos de la violencia, con capacidad económica y acceso a la educación para prevenir que entren a este programa (SRPA)” - Manifiesto de las niñas, niños y adolescentes de Medellín Antioquia.

□ Para más información

- Congreso de la República de Colombia. (Noviembre 8, 1994). Ley 1098. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
- Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento Nacional de Planeación CONPES 3629 2009, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA. <https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/conpes-3629-srpa.pdf>
- Ministerio de Justicia. (2021). Evaluación y Verificación del Seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Oficina de Control Interno. <https://www.minjusticia.gov.co/ministerio/Documents/ControlInterno/Informe%20Final%20SRPA.pdf>
- Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Colombia potencia mundial de la vida’ 2022-2026. <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>

En www.ninezya.org se encuentran otras siete notas sobre los otros derechos por los que aboga esta coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil.

Consejo Directivo Nacional: aeioTU, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), Centro de Investigación Imagina Uniandes, Corporación Juego y Niñez, Fondo Acción, Fundación Barco, Fundación Empresarios por la Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación FEMSA, Fundación Lumos Colombia, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Santo Domingo, Fundación Save the Children, Fundación United Way Colombia, Jerez & Sandoval - Medios y RS, Proantioquia y World Vision.

Comité Coordinador de NiñezYA Antioquia: Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama, Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, Corporación Cariño IPS Creciendo Con Cariño, Corporación Educativa Combos, El Comité de Rehabilitación de Antioquia, Federación Antioqueña de ONG (FAONG), Fundación Antioquia Infantil FAIN, Fundación Carla Cristina, Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE, Fundación Éxito, Fundación Golondrinas, Fundación Hogares Campesinos Juveniles de Colombia, Fundación Sofía Pérez de Soto, PAN Corporación Social, Presencia Colombo Suiza, Proantioquia, Universidad EAFIT Programa Universidad de los niños y World Vision (Regional Antioquia).

Investigación y redacción: Fundación Tiempo de Juego: Juliana Cano y María Camila Cuéllar.

Revisión técnica y edición: Ángela Constanza Jerez (Coordinadora nacional de NiñezYA) y María Alejandra González (Consultora NiñezYA).

Apoyo revisión: Diana Jerez (Jerez & Sandoval - Medios y Responsabilidad Social).

Concepto y diseño: Fabián Cárdenas. Bogotá, junio 2025



Adolescentes en conflicto con la ley, sin segunda oportunidad

NOTA #1

« JUNIO 2025 »



www.ninezya.org



NinezYA



@Ninez_Ya